

Causa	Ruc 24-4-0574741-K	Rit M-295-2024
Materia	Despido injustificado Cobro de prestaciones laborales	
Procedimiento	Monitorio	
Demandante	Julia Ivonne Cáceres Mendoza	C.I. 14.555.190-0
Abogados	Gregory Benedicto Peñailillo Arellano	C.I. 12.985.242-9
Demandado	Fundación Educacional Para El Desarrollo Integral De La Niñez	Rut 70.574.900-0
Abogados	Catalina Andrea Padilla Parga	C.I. 13.949.898-4
Ingreso	14 de mayo de 2024	
Aud. de juicio	11 de julio de 2024	
Juez	Juan Marcelo Bruna Parada	

Talca, quince de julio de dos mil veinticuatro.

VISTO, OÍDO Y CONSIDERANDO.

Primero: Partes del juicio. Que son partes en este juicio laboral sobre despido injustificado, cobro de prestaciones laborales, Ruc 24-4-0574741-K, Rit M-295-2024 del Juzgado de Letras del Trabajo de Talca, doña JULIA IVONNE CÁCERES MENDOZA, ingeniera informática, domiciliada en Villa Doña Antonia, Calle Unihue N°1826, Maule, como demandante; y FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ, representada legalmente por doña María Dionila González Sandoval, directora regional subrogante, ambos domiciliados en calle Uno Sur N°1201, de Talca, como demandada.

Segundo: Demanda. Comparece don Gregory Peñailillo Arellano, abogado, en representación de doña Julia Ivonne Cáceres Mendoza, quien interpone demanda por despido injustificado y cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales, en contra de la Fundación Educacional Para El Desarrollo Integral De La Niñez, (Fundación Integra) representada por doña María Dionila González Sandoval, señalando.

Su representada ingresó, en el mes de enero del año 2016, a trabajar en Fundación Integra como analista en labores asociadas al "activo fijo" en el Departamento de Finanzas en la Oficina Regional ubicada en calle 1 sur N°1201, de Talca. Previamente, en el año 2014, se había desempeñado en dicha institución, efectuando reemplazos en el Departamento de Protección a la Infancia y en 2015 en el Departamento de Finanzas y de Servicios a Personas, en labores administrativas.



La jornada de trabajo pactada era de 45 horas semanales dividida de lunes a viernes de 08.30 a 17.30 horas.

La remuneración mensual correspondía a la suma de \$1.520.133.

En lo referente al "activo fijo" de los jardines infantiles de Integra de la Región del Maule (117 en la región), este dice relación con la totalidad del mobiliario y material didáctico con los que deben contar cada uno de los establecimientos, necesario además para lograr y mantener el reconocimiento oficial, y mantenerlo en el tiempo. A modo de ejemplo, dentro de las labores habituales de la demandante, debía visitar 57 establecimientos al menos una vez en el año, para verificar las condiciones del activo fijo, desempeñándose en terreno regularmente dos o tres veces por semana dentro de la región, contando incluso con anexo de contrato para poder conducir vehículos institucionales. A esto se suma todo el trabajo administrativo derivado de este chequeo continuo en donde se debía cotejar la información captada en terreno con lo existente en sistema computacional, imprimir y etiquetar bienes con activo de valor mayor a 3 UTM, realizar un informe por establecimiento para enviar al nivel central, enviar los informe de reconocimiento oficial, confeccionar y enviar las listas de inventario, realizar bajas de sistema de bienes en mal estado, realizar alta, activación de bienes nuevos con valor mayor a 3 UTM, entre otras, relacionadas con el activo fijo.

Lo cierto es que esta y otras labores relacionadas con el activo fijo, son de desarrollado continuo en el tiempo, ya que el control de este activo es algo que no cesa.

Con fecha, 11 de marzo de 2024, a la trabajadora le fue comunicado por su última jefatura de departamento, doña Carolina Barrientos, que se encontraba despedida y que tenía en su poder la respectiva carta de despido por la causal de necesidades de la empresa.

Dicha carta posteriormente le fue notificada, vía correo certificado, documento, que encontrándose fechado el 11 de marzo de 2024, señalada que



se ponía término al contrato de trabajo a contar de ese mismo día, por la causal prevista en el Artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo, esto es por "Necesidades de la Empresa", fundando la causal en una especie de racionalización y reorganización del personal según consta del documento mencionado.

Los hechos que da cuenta la carta de despido no constituyen la causal, por lo que su despido es improcedente.

Al firmar el finiquito, la actora hizo expresa reserva del derecho de demandar el cobro de prestaciones adeudadas entre ellas el recargo por aplicación de la causal de despido injustificada y los descuentos por AFC realizados de forma improcedente.

Montos que la demandada adeuda y debe pagar a la trabajadora.

De esta forma, y tal como lo establece la ley, por tratarse de un despido injustificado por aplicación de la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa, el artículo 168 de dicho cuerpo legal establece un recargo de 30% calculado sobre el monto de la indemnización a que tiene derecho el trabajador por concepto de años de servicio.

En este caso habiéndosele asignado en el finiquito el pago de la suma de \$12.161.064 por dicho concepto, la demandada le adeuda a la trabajadora la suma de \$3.648.378. por recargo establecido en el artículo 168, letra a) del Código del Trabajo.

De igual modo le adeuda a la trabajadora la suma de \$2.391.165, suma que corresponde al descuento que efectuó del finiquito por aporte del empleador al seguro de cesantía (AFC), por ser dicho descuento realizado, improcedente.

Tercero: Contestación de la demanda. En la audiencia de juicio, la abogada Catalina Andrea Padilla Parga, contestando la demanda, solicitó su rechazo, con expresa condena en costas, señalando.

Es efectivo que la demandante comenzó a prestar servicios en Integra Dirección Regional del Maule el 16 de enero de 2016 como analista de "activo fijo", dependiente del dpto. de Finanzas Regional.

Su jornada de trabajo según consta del su contrato era de 8.30 a 17.30 horas y la remuneración mensual alcanzaba los \$1520133 pesos.

Es efectivo además que se puso término a la relación laboral con fecha 11



de marzo de 2024, por la causal contemplada en el inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo, esto es necesidades de la empresa, establecimiento o servicio

Esta parte niega y controvierte:

No es efectivo que el despido de la actora sea injustificado, ilegal e improcedente, como señala en la demanda, así como tampoco es efectivo que no se hayan dado los presupuestos de la causal invocada, ergo, no resulta procedente el recargo del 30% por sobre la indemnización por años de servicios, esto es, la suma pretendida de \$3.648.378.-

No es efectivo que sea procedente la devolución a la actora del monto descontado por concepto del aporte del empleador al seguro de cesantía, esto es, la suma de \$2.391.165.-

Con fecha 11 de marzo de 2024 se puso término al contrato de trabajo del demandante, por la causal establecida en el artículo 161 N°1 del Código del Trabajo. Esta causal de despido autoriza al empleador a poner término al contrato de trabajo invocando las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales como las derivadas de la racionalización o modernización de los mismos, bajas en la productividad, cambios en las condiciones del mercado o de la economía, que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores, una manifestación de la libertad del empleador de administrar su empresa, adaptándose a las circunstancias técnicas o económicas que se le presenten.

Esto ante un cambio en las circunstancias económicas institucionales pues como bien se señala en la carta de despido, el financiamiento institucional se da a través de la ley de presupuesto del sector público.

Es del caso que el proceso institucional orientado al ajuste de las dotaciones de personal a coeficientes se inicia el año 2023 en el mes de junio y a la fecha se encuentra en curso. En dicha oportunidad se solicita a la Dirección Regional del Maule revisar su cartera de proyectos que exceden de la dotación de planta autorizada, y definir en virtud de dicho análisis aquellos proyectos críticos que pudieran pasar a ser parte de la dotación permanente de personal y que resultaran de relevancia para el correcto funcionamiento de Integra, es decirse trata de una racionalización y consecuente reestructuración regional.

Menciona en este punto que la planta activa autorizada corresponde a aquellos cargos cuyas remuneraciones se contemplan al momento de financiar



presupuestariamente a Fundación Integra, por ende, todo lo que excede de la planta autorizada, por ejemplo, proyectos especiales queda sin financiamiento si por ley de presupuesto no se le asignan los mismos recursos para operar una vez llegado su término, lo que ocurre en la actualidad.

En esta línea, fue necesario reconsiderar la permanencia del proyecto de activo fijo o inventario en el panorama presupuestario regional proyectado al año 2024, entre otros proyectos que se vieron afectados, como por ejemplo sin que esto sea taxativo, proyecto de inscripción y matrícula del dpto. de cobertura (Yerko Román) proyecto de plan y regularización de JI y SC (Pamela Sandoval), proyecto de apoyo a emergencia sanitaria (Javiera Vásquez) proyecto inventario (Julia Cáceres).

Respecto al descuento del aporte hecho por el empleador al seguro de cesantía, procede conforme lo autoriza el artículo 13 de la Ley N°19.728.

Cita normas legales y concluye solicitando rechazar la demanda con costas y en subsidio, y para el evento que se estime como injustificada, indebida e improcedente la causal invocada, el descuento efectuado por el empleador a la indemnización por años de servicios por la suma de \$2391165.- en razón del descuento por su aporte al fondo de cesantía se encuentra, de igual forma, ajustado a derecho en razón que la declaración judicial que se efectúe del despido no constituye un obstáculo para haber llevado a cabo el descuento respectivo a la indemnización por años de servicio de la parte del saldo de la cuenta Individual por cesantía aportado por el empleador.

Cuarto: Prueba de la parte demandante. Que la parte demandante en la audiencia de juicio incorporó en forma legal los siguientes medios de prueba.

Prueba documental.

1. Carta de despido, de fecha 11 de marzo de 2024.
2. Finiquito de contrato de trabajo suscrito ante fiscalizadora de Inspección del Trabajo con fecha 01 de abril de 2024.
3. Anexo de contrato de trabajo de fecha 04.04.2019 entre las partes, con facultades para conducir vehículos institucionales.
4. Acta de entrega de notebook a la funcionaria Julia Cáceres Mendoza, de fecha 31.03.2023 indicando cargo “analista activo fijo”.
5. Guía para solicitar Reconocimiento Oficial: antecedentes y requisitos mínimos. decreto N°315/2010 Mineduc.



Exhibición de documentos:

1. Contrato de trabajo celebrado con doña Julia Ivonne Cáceres Mendoza y todos sus anexos.

2. Archivo con “Informe visitas jardines 2023”, efectuados por doña Julia Ivonne Cáceres Mendoza, durante el año 2023 y 2024.

Absolución de posiciones.

Compareció en representación de la entidad demandada doña María Dionila González Sandoval, quien legalmente interrogada, expuso:

Julia Cáceres era analista de activo fijo. El activo fijo considera la supervisión de mobiliario y material didáctico de los jardines infantiles, las funciones las desempeñaba en terreno y en la Dirección Regional. Ella debía asistir a los jardines infantiles y levantar actas de los insumos físicos; en oficina hacía informes de las condiciones de activos fijo y material didáctico, los inventarios y actividades administrativas relacionado con la materia. Los activos fijos sirven para obtener reconocimiento oficial. A la fecha 27 jardines infantiles no tiene reconocimiento oficial.

Sexto: Prueba de la parte demandada. Que la parte demandada a fin de probar sus alegaciones y defensas incorporó los siguientes medios de prueba.

Prueba documental.

1.- Contrato de Trabajo, anexo y actualizaciones de contrato de doña Julia Ivonne Cáceres Mendoza

2.- Carta de aviso de término de contrato.

3.- Comprobante ante Inspección del Trabajo.

4.- Finiquito de contrato de trabajo.

5.- Organigrama Dirección Regional del Maule de Fundación Integra, de mayo de 2023.

6.- Organigrama Dirección Regional del Maule de Fundación Integra, de octubre de 2023.

7.- Organigrama Dirección Regional del Maule de Fundación Integra, de enero de 2024.

8.- Organigrama Dirección Regional del Maule de Fundación Integra, de abril de 2024.



9.- Copia de correo electrónico de fecha 29 de diciembre de 2023, que informa la no continuidad en el presupuesto 2024 de los proyectos que en el correo se indican.

10. Copia de correo electrónico de 10 de octubre de 2023, de doña Carolina Reyes a directores regionales de Fundación Integra.

11. Copia de correo electrónico de 25 de mayo de 2023, de Milton Galdames dirigido directora regional Integra.

Prueba testimonial.

1.- Compareció don Fernando Andrés Carreño Morales, quien legalmente interrogado, expuso.

Conoce a las partes del juicio. Con Julia fueron compañeros de trabajo. Ella se desempeñaba en el departamento de administración y finanzas en el área de activo fijo.

El despido de Julia fue por racionalización de personal por reajustes presupuestario de la institución. En la región tenían 18 proyectos y entre noviembre y diciembre se les puso término a 7 proyectos. Desde mediados del año pasado se dio a conocer el déficit presupuestario y desde octubre de comunicó que no seguían algunos proyectos. Hoy en día se tienen 5 proyectos que están en evaluación en su continuidad.

Contrainterrogado, manifestó. Cuando supo que iba a ser testigo le informaron de los antecedentes del juicio. Él es jefe de servicios de personas subrogante de Integra, lleva 11 años y tiene contrato indefinido.

Séptimo: Que la entidad empleadora es una fundación, sociedad que por su naturaleza y fines, su patrimonio no tiene por objeto la generación de utilidades con fines de lucro, sino de beneficencia o de interés general, de ahí que su regulación sea diferente a las personas jurídicas comerciales con fines de lucro.

Sin perjuicio de la naturaleza de las fundaciones, en materia de relaciones laborales deben respetar las normativa legal, sin existir excepciones en esta materia, es por ello, que por analogía se les puede hacer extensivo lo que ha sostenido la jurisprudencia de los tribunales de justicia, al plantear que la causal de necesidades de la empresa, establecimiento o servicio es una causal objetiva, esto es, requiere de ciertos presupuestos para poder ser invocada por el empleador, puesto que no depende de la mera voluntad del empleador. La misma se encuentra referida a circunstancias graves o irremediables en que se



encuentra el empleador, pudiendo tener su origen en motivos derivados del funcionamiento de la empresa, como la modernización o racionalidad de ella, o en circunstancias de carácter económico, como las bajas en la productividad, cambio en las condiciones de mercado o de la economía, circunstancias que deben ser explicitadas en cada caso concreto en que se aplique la causal, debiendo estos problemas económicos no ser transitorios o subsanables, siendo el carácter de necesario del despido, constituyendo un requisito sine qua non de la causal invocada.

Si bien, en el caso de autos, no se está ante una empresa privada que se desempeñe en el mercado económico, por lo que no se puede considerar motivos derivados del funcionamiento de la empresa, como la modernización o racionalidad de ella, o en circunstancias de carácter económico, como las bajas en la productividad, cambio en las condiciones de mercado o de la economía; pero, si es procedente tener en cuenta, los cambios en la estrategia para llevar adelante los objetivos de la fundación, en la medida que sean necesarios e indispensables para un mejor uso de los recursos, superar problemas de índole económico que de mantenerse las contrataciones hagan imposible la continuidad de la fundación o pongan el peligro los objetivos fundacionales.

El caso es que en la carta de despido se menciona en forma genérica que el despido se sustenta en los siguientes hechos: “Esta determinación está basada esencialmente en la racionalización y reorganización del personal, funciones y cargos pertenecientes al Departamento de Administración y Finanzas de la Dirección Regional del Maule, donde usted se desempeña actualmente como analista de Administración y Finanzas de Fundación Integra, lo cual motiva la presente decisión”.

“En efecto, como es de su conocimiento, su cargo fue creado para el desarrollo de un Proyecto especial, como dotación adicional y extraordinaria a las plantas ya existentes en Fundación Integra, a fin de ser un soporte precisamente para el proyecto referido, no siendo viable en consecuencia mantener la relación laboral.”

No se establecen hechos objetivo que motiven tal reorganización y su relación con los fines fundacionales y la necesidad de la desvinculación para evitar el colapso económico o el peligro de incumplir los fines de la fundación.



Si bien al contestar la demanda, se señaló que el cargo de la demandante estaba relacionado con el proyecto de activo fijo y que este no tendría financiamiento para su continuación, lo que además ocurría con varios proyectos más, siendo ilustrado por el testigo que declaró en juicio, ello no es parte de la carta de despido y lo referido tanto, por el testigo de la demandada como por la representante de la institución al absolver posiciones, es genérico en cuanto a la reorganización, sin que puedan aceptarse nuevos antecedentes, por atentar en contra del derecho a defensa de la trabajadora, toda vez que la litis en materia laboral se traba con lo que se señala en la carta de despido y la demanda.

Por consiguiente, conforme a lo que se ha venido razonando corresponde declarar que el despido de la trabajadora es improcedente, por lo que la entidad demandada deberá pagar a la Sra. Julia Ivonne Cáceres Mendoza la siguiente prestación:

a.- La suma de \$3.648.319, por concepto de recargo legal del 30% del artículo 168 letra a) del Código del Trabajo.

Octavo: En cuanto a la restitución de lo descontado por seguro de cesantía. En cuanto a la restitución de lo retenido por concepto de seguro de cesantía, el máximo tribunal de justicia ha rechazado recursos de unificación de jurisprudencia de manera sostenida, desde el rol N°27.867-17, siguiendo con los N°23.348-2018, N°4.503-19, N°19.198-19, N°16.086-19, N°6.187-19, N°12.179-19 y últimamente en los roles N°s19.607-19, 134.204-20 y 6.887-21, 44.919-21, entre otros, donde se ha establecido que una condición sine qua non para que opere el descuento materia de autos, es que el contrato de trabajo haya terminado efectivamente por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, lo que se ve corroborado por el artículo 168, letra a) del Estatuto Laboral, de manera que si la sentencia declaró injustificado el despido privó de base a la aplicación del inciso segundo del artículo 13 de la Ley N°19.728, pues tanto la indemnización por años de servicio como la imputación de la parte del saldo de la cuenta individual por cesantía, constituyen un efecto que emanó de la exoneración prevista en el artículo 161 del Código del Trabajo. En consecuencia, si el término del contrato por necesidades de la empresa fue considerado injustificado por el tribunal, simplemente no se satisface la condición, en la medida que el despido no tuvo por fundamento una de las causales que prevé el artículo 13 de la Ley N°19.728.



En consecuencia, es procedente la restitución del dinero que se retuvo por concepto de seguro de cesantía, debiendo restituir la demandada la suma retenida, según da cuenta el correspondiente finiquito, \$2.392.165.

Noveno: Prueba no considerada. La prueba incorporada por la parte demandada consistente en organigramas, correos electrónicos y finiquitos de otros trabajadores, al igual que la prueba documental solicitada exhibir por la parte demandante, en especial con “Informe visitas jardines 2023”, nada aporta a proceso, toda vez que dicen relación con las circunstancias referidas en la contestación de la demanda en la audiencia de juicio y en atención que la carta de despido nada dice sobre tal teoría del caso, no pueden ser considerados para resolver.

Y teniendo además presente lo dispuesto en los artículos 63, 161, 168, 173, 456, del Código del Trabajo, 13 de la Ley N°19.728, se resuelve:

I.- Que se acoge la demanda de despido injustificado, deducida por don Gregory Peñailillo Arellano, abogado, en representación de doña Julia Ivonne Cáceres Mendoza, en contra de la Fundación Educacional Para El Desarrollo Integral De La Niñez, (Fundación Integra) representada por doña María Dionila González Sandoval, ya individualizados, declarándose que el despido de la trabajadora es improcedente, en consecuencia, la demandada le deberá pagar a la Sra. Cáceres Mendoza las siguientes prestaciones:

a.- La suma de \$3.648.319 por concepto de recargo legal del 30% del artículo 168 letra a) del Código del Trabajo.

b.- La restitución de lo descontado por concepto de seguro de cesantía, la suma de \$2.392.165.

Las sumas ordenadas pagar deberán intereses y reajustes en la forma que los disponen los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

II.- Que se condena en costas a la parte demandada por haber perdido en juicio. Se regulan las costas personales en la suma de \$600.000. Tásense las costas procesales si las hubiere.

Notifíquese, regístrese, remítase copia de la sentencia vía correo electrónico y archívese en su oportunidad.

RIT M-295-2024

RUC N° 24-4-0574741-K



Dictó don **JUAN MARCELO BRUNA PARADA**, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Talca.

Talca, quince de julio de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario la sentencia que antecede.

